

Chillán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que, comparece la abogada doña Valentina Hormazábal González, Defensora Penal Pública, en favor de Janes Domingo Mardones Vivallos y Brayan Alejandro Pardo Hernández, ejerciendo acción constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por la Juez Titular del Juzgado de Garantía de Yungay doña Sandra Rozas Schuffeneger el día 11 de enero del año 2022, en causa RIT N° 1007-2021 del Juzgado de Garantía de Yungay, resolución en que se decretó, entre otras, la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno respecto de sus representados.

Para fundar su presentación, refiere que con fecha 09 de febrero de 2022, se lleva a cabo, ante el Juzgado de Garantía de Yungay, audiencia de formalización en contra de los imputados ya individualizados. Ambos fueron formalizados por el delito de robo con violencia, en grado de desarrollo consumado y participación en calidad de autores. En la audiencia, el Ministerio Público solicita la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los dos imputados, fundamentando su solicitud en los antecedentes que constaban en la carpeta de investigación. Posteriormente, de conformidad al artículo 10 del Código Procesal Penal, se solicita por parte de la defensa suspensión de la audiencia, toda vez que en la copia de carpeta de investigación que existía en su poder no se encontraban los antecedentes que había expuesto el fiscal en su solicitud de prisión preventiva, otorgando el tribunal un receso de 10 minutos al Ministerio Público para que enviara los documentos faltantes. Durante el transcurso de los 10 minutos, el Ministerio Público envía documentos a la defensa, observando ésta que aún faltaban, lo que incluso se había hecho presente en audiencia de formalización de fecha 10 de noviembre de 2021 y que se suspendió por dicho motivo, de manera que el tribunal decide suspender la audiencia y reanudarla el día viernes 11 de febrero a las 08.30 horas.

Señala que, reanudada la audiencia el día 11 de febrero de 2022, la defensa se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva respecto de ambos imputados. No se cuestionó por parte de la defensa la existencia del delito. Si se cuestionó, en cambio, la participación de sus representados en los hechos, esto es, la letra b) del artículo 140 del Código Procesal Penal. Lo anterior, en base a los argumentos que transcribe. Dicha argumentación fue acogida por el tribunal, rechazando la medida cautelar de prisión preventiva, por cuanto a su juicio no se reúne la letra b) del artículo 140 del Código Procesal Penal. Considera que se



desprende de dicha resolución, que el tribunal no accedió a la medida cautelar de prisión preventiva por no reunirse en la especie la letra b) del Artículo 140 del Código Procesal Penal y siendo los requisitos de esta norma copulativos, entonces la rechaza. Sin embargo, acto seguido, decreta una medida cautelar igualmente privativa de libertad y restrictiva de derechos, como lo es el arresto domiciliario nocturno, lo que, a juicio de la letrada, es del todo ilegal y arbitrario, precisamente porque el mismo tribunal señala que los requisitos son copulativos para imponer una cautelar y, segundo, porque solo señaló como fundamento para decretarlo estar frente a “un delito grave”, ignorando lo anteriormente señalado, en el sentido que no se daba por acreditada, en esta etapa procesal, la participación como autores de los imputados en el hecho punible investigado.

Agrega que, la resolución judicial que decretó el arresto domiciliario nocturno de sus representados constituye un acto ilegal y arbitrario que infringe la garantía constitucional de libertad personal consagrada en el artículo 19 N° 7 letra b) de la Constitución Política de la República, ya que incumple las exigencias de fundamentación que imponen los arts. 36, 122, 140 y 143 del Código Procesal Penal. Solo se limita a señalar que decreta arresto domiciliario nocturno por estar frente a “un delito grave”, tornándola no solo en ilegal y arbitraria, sino que además perjudicando a sus representados, ya que actualmente ambos tienen trabajo, y en particular a don Janes, quien se debe trasladar a la ciudad de Iquique a cumplir con su jornada laboral.

Termina solicitando que esta Corte, en conformidad con lo expuesto y según lo dispuesto por el artículo 19 N° 3 inciso séptimo; artículo 19 N° 7 y artículo 20 de la Constitución Política de la República; artículo 9° de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 5, 36, 122, 140, 143, y 205 del Código Procesal Penal; y demás normativa aplicables, se sirva tener por interpuesta la Acción Constitucional de Amparo deducida en contra de la resolución dictada por la Juez Titular del Juzgado de Garantía de Yungay, doña Sandra Rozas Schuffeneger, con fecha 11 de febrero de 2022, en causa RIT 1007-2021, acogerlo a tramitación y, en definitiva acogerlo, ordenando como medida para restablecer el imperio del derecho dejar sin efecto la resolución solo en aquella parte que decreta la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno respecto de los amparados, revocando, en consecuencia, dicha cautelar.

2°.- Que, al informar doña Sandra Rozas Schuffeneger, Juez Titular del Juzgado de Garantía de Yungay, refiere que respecto de los amparados de autos, en la audiencia respectiva, la fiscalía, luego de formalizar, solicita como medida cautelar para ambos imputados la prisión preventiva, por los argumentos vertidos



en audiencia, a la cual se opuso la defensa. Acogiendo los argumentos planteados por la defensa, la jueza rechazó la concesión de dicha medida cautelar, por estimar que no se encontraba configurada la letra b) del art. 140 del Código Procesal Penal, puesto que de las declaraciones de las víctimas prestadas el día de los hechos -06 de diciembre de 2019- y aquellas vertidas posteriormente el año 2021, se advirtieron serias inconsistencias en cuanto a quiénes fueron las personas que cometieron el ilícito.

Señala que, una vez desestimada la pretensión del ministerio público, y dados los argumentos de ello, se abrió debate y propuso como medida cautelar el arresto domiciliario parcial, además de firma quincenal y arraigo nacional, todas ellas contenidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. Por su parte la fiscalía local de Yungay, decidió no apelar de la resolución dictada, y estuvo conforme con lo resuelto, no así la defensa, quien solicitó únicamente el art. 155 c), y se opuso al arresto parcial nocturno ya que, a su juicio, al no cumplirse con todos los requisitos del artículo 140, no es posible ni procedente conceder una medida cautelar como aquella. Sobre la base del artículo 155 del CPP y en el contexto anteriormente expuesto, es que en definitiva fue decretada la medida cautelar señalada, por estimarse, tal como se indicó en audiencia, que a pesar de no cumplirse con la letra b) del artículo 140, es posible decretar otras cautelares de menor intensidad, señalando que se está ante la formalización de un ilícito grave, que tiene aparejada una pena de crimen, que son varios los imputados, y que es un delito de carácter pluriofensivo, entre otras cosas, y que la circunstancia de que no se reúnan en la especie todas las letras del art. 140, no impide al tribunal entender que el arresto domiciliario parcial era aquella medida que se ajustaba al mérito de los antecedentes, además de estimarse proporcionada a los mismos.

Agrega que, nuestro Código Procesal Penal autoriza la concesión de medidas cautelares incluso cuando ha sido declarada ilegal la detención, de acuerdo al artículo 132 del mismo cuerpo legal, existiendo oportunidades donde se ha cuestionado la existencia del delito, sin embargo, se han otorgado medidas cautelares, tal como sucedió en reiteradas oportunidades durante la discusión que surgió con la aplicación del artículo 318 del Código Penal, en contexto de la pandemia durante el año 2020. Así las cosas, la jueza estima que es posible decretar medidas cautelares aun cuando no se cumplan con todos los requisitos del artículo 140, toda vez que el mismo artículo 155 lo autoriza cuando señala “en cuanto no se opusieren a lo previsto en este párrafo”. De lo contrario, se estaría ante el absurdo de la imposibilidad de decretar medida cautelar alguna del artículo



155 cuando se desestime la prisión preventiva, entendido, a su parecer que esa no es la interpretación correcta de la norma, ni la intención que el legislador tuvo a la vista al momento de su dictación, pues de lo que se trata aquí es del estándar requerido respecto de los antecedentes que presenta el ministerio público, los que claramente deben ser de mayor calidad cuando solicita la medida más gravosa de nuestro ordenamiento.

Manifiesta que, por último, llama la atención que la defensa haya decidido interponer en primer lugar un recurso extraordinario, antes que uno ordinario como la apelación.

Termina expresando que, en consecuencia, con lo expuesto, estima que no se ha cometido ningún acto ilegal y/o arbitrario al dictar la resolución en cuestión, al estar suficientemente fundada, y otorgada conforme a la ley.

3°.- Que, el recurso de amparo, tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, pueda ocurrir a la magistratura a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El mismo recurso, en igual forma, puede ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

4°.- Que, concordante con lo señalado precedente, el recurso de amparo tiene como objeto restablecer el imperio del derecho ante cualquier perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de la libertad personal y seguridad individual, que tenga como causa un acto u omisión arbitraria o ilegal.

5°.- Que, en el presente caso, la Acción Constitucional de Amparo deducida en contra de la resolución dictada por la Juez Titular del Juzgado de Garantía de Yungay, doña Sandra Rozas Schuffenegger, se dirigió por la recurrente con el objetivo de restablecer el imperio del derecho, intentando dejar sin efecto la resolución, solo en aquella parte que decreta la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno respecto de los amparados, revocando, en consecuencia, dicha cautelar.

6°.- Que atendido lo expuesto, se estima que la resolución judicial dictada por el Juez recurrido, impugnada por la acción constitucional de amparo, emanó de la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, dentro de sus



atribuciones legales y en el marco legal vigente, encontrándose suficientemente fundada y no desprendiéndose que ella constituya una actuación ilegal o arbitraria o que se haya procedido sin razón aparente que pueda ser reparada por la vía del presente recurso.

7°.- Que, en virtud de lo razonado precedentemente, no aparece que exista algún hecho actual que constituya privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual de las personas respecto de las cuales se recurre, toda vez que la diligencia solicitada lo fue dentro del marco de una investigación en curso, se debatió en audiencia y se resolvió conforme a las disposiciones legales vigentes, por lo que las alegaciones formuladas por el recurrente resultan ajenas a la acción constitucional de amparo, resultando innecesario adoptar medidas protectoras en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza** el recurso de amparo deducido por la abogada doña Valentina Hormazábal González, en favor de Janes Domingo Mardones Vivallos y Brayan Alejandro Pardo Hernández, en contra de la Juez Titular del Juzgado de Garantía de Yungay doña Sandra Rozas Schuffeneger.

Notifíquese, comuníquese y ejecutoriado, archívese.

Redacción del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

Rol N°40-2022.- AMPARO.-



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S., Ministro Claudio Patricio Arias C. y Fiscal Judicial Solon Rodrigo Viguera S. Chillan, veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

En Chillan, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

